

COMUNICADO DE PRENSA

BOLETÍN DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESS/TE/031
8 de noviembre de 1999

EL COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA OMC EXAMINA LOS SERVICIOS, LAS RELACIONES ENTRE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y LAS NO GUBERNAMENTALES, Y LOS DOS GRUPOS TEMÁTICOS, Y ADOPTA SU INFORME DE 1999 Y SU CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL AÑO 2000

En la reunión que el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC celebró el 12 de octubre de 1999, los Miembros aprobaron el informe sobre la labor del CCMA en 1999. El Presidente, Embajador István Major (Hungría), presentó dicho informe al Consejo General en su reunión del 4 de noviembre de 1999. Los Miembros adoptaron también el programa de trabajo del CCMA y su calendario de reuniones para el año 2000 (véase el *Boletín de Comercio y Medio Ambiente* N° 30).

Asimismo, los Miembros trataron los siguientes temas: los servicios y el medio ambiente; las relaciones entre las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales; y los grupos temáticos del acceso a los mercados y las vinculaciones entre el programa multilateral de medio ambiente y el del comercio. Los Miembros formularon propuestas sobre la manera de fortalecer las relaciones con la sociedad civil; la importancia de llevar a cabo estudios ambientales en el plano nacional; los efectos medioambientales derivados de la eliminación de las subvenciones a la agricultura, la pesca, la silvicultura y el sector de los servicios relacionados con el medio ambiente; la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen; y la relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC.

El CCMA otorgó la condición de observador intergubernamental al Banco Islámico de Desarrollo y al Centro de Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental.

A continuación sigue un informe detallado sobre la reunión del mes de octubre. Los documentos citados en el presente Boletín pueden consultarse en el sitio de la OMC en Internet o solicitarse en la División de Comercio y Medio Ambiente.

Punto 9 El programa de trabajo previsto en la Decisión sobre el comercio de servicios y el medio ambiente

Las Comunidades Europeas recordaron la propuesta que habían presentado en septiembre de 1999 con respecto al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), relativa a la clasificación de los servicios del sector ambiental (S/CSC/W/25). Las CE habían propuesto una nueva clasificación que, preservando el sistema de Clasificación Central de Productos (CPC) de las Naciones Unidas, suplía las deficiencias de éste y reflejaba la realidad económica. El sistema de clasificación propuesto comprendía servicios que eran "exclusivamente" ambientales pero no incluía servicios conceptuales como el diseño, los servicios de ingeniería, la investigación y desarrollo y los servicios de consultoría, clasificados en otras partes del AGCS. Las CE proponían que esos servicios fuesen objeto de una negociación por grupos, cuyo resultado se incluiría en listas en sectores pertinentes del AGCS distintos del medio ambiente. Los países que no estuviesen dispuestos a contraer un compromiso con respecto a toda una categoría (por ejemplo, los servicios de ingeniería) podrían comprometerse en una esfera más reducida, como la ingeniería ambiental.

Punto 10 La información a los órganos competentes sobre las disposiciones apropiadas que han de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a las que se hace referencia en el artículo V del Acuerdo por el que se establece la OMC

Los Estados Unidos indicaron que los Miembros deberían aunar sus fuerzas con miras a hallar maneras de fortalecer las oportunidades de la OMC para aumentar el apoyo público con el que cuenta su labor. Desde que en 1947 se emprendió la liberalización del comercio en el marco del GATT, fue aumentando el interés de la opinión pública en las negociaciones comerciales, en particular, al hacerse esta labor extensiva a cuestiones que afectaban a la vida cotidiana del ciudadano de a pie. De ese modo, aumentó el interés del público general y de los sectores privados por tener la oportunidad de seguir de cerca las actividades de la OMC y de iniciar un diálogo con sus representantes gubernamentales en la Organización.

Los Estados Unidos, el Canadá y las CE hicieron referencia a los Simposios de alto nivel de la OMC sobre comercio y medio ambiente, celebrados en marzo de 1999, en los que se había registrado un elevado nivel de participación de los Gobiernos y de la comunidad de ONG. Dichos Simposios habían demostrado lo valiosos que tales intercambios podían resultar para la OMC.

Las CE y el Canadá también insistieron en la necesidad de aumentar el apoyo público y fomentar la transparencia en la OMC, incluido el CCMA. En opinión del Canadá, era preciso esforzarse en mayor medida por lograr una comprensión de esas vinculaciones, abordar las preocupaciones que pudiesen existir al respecto, corregir las percepciones erradas y consolidar la confianza en la OMC y en sus procedimientos. Las CE habían aumentado la transparencia en lo que respecta a su procedimiento de elaboración de políticas, por ejemplo en lo tocante a los preparativos para la Conferencia Ministerial de Seattle. Las CE apoyaban asimismo las sesiones informativas que el CCMA venía celebrando con las secretarías de Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente.

Como medida práctica, el Canadá había propuesto que la OMC liberalizara su política de supresión del carácter reservado de los documentos con miras a contribuir a informar a los electorados nacionales de un modo más abierto y puntual, facilitando así los medios para un debate constructivo. El Canadá había propuesto asimismo que los Miembros y la Secretaría organizaran iniciativas de divulgación destinadas a aclarar en qué consistía la labor de la OMC. Una mayor transparencia del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC aumentaría la confianza de todas las partes interesadas en su procedimiento de solución de diferencias.

CONTINÚA

ACCESO A LOS MERCADOS

Punto 2 La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio

Los Estados Unidos y el Canadá recordaron que en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC el objetivo de la liberalización del comercio se citaba conjuntamente con el compromiso general de lograr un desarrollo sostenible. Los estudios ambientales constituían una manera importante de recabar la información necesaria a tal efecto. El Gobierno estadounidense se había comprometido a efectuar un estudio en el contexto de una nueva ronda. Las CE indicaron que habían adoptado una decisión respecto de la metodología que se utilizaría para llevar a cabo un análisis de sostenibilidad de su posición para la próxima ronda. El Canadá señaló que realizaría de dicha ronda una evaluación ambiental estratégica nacional. Los Estados Unidos, el Canadá y las CE animaron a todos los Miembros a emprender estudios medioambientales y a dar a conocer sus resultados en el CCMA.

Un Miembro señaló que en la Declaración de Río se establecía claramente que los estudios ambientales eran competencia de los gobiernos nacionales, que habían de efectuarlos según lo estimaran apropiado; esos estudios brindaban a los gobiernos nacionales una buena ocasión para recabar información de las partes interesadas nacionales, información en la que podían basar la posición de su país. Con todo, se trataba de una prerrogativa exclusivamente nacional.

Punto 4 Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

Accediendo a una propuesta formulada por las Comunidades Europeas, el CCMA acordó suprimir el carácter reservado de la Base de Datos de la OMC sobre medio ambiente para 1998 (WT/CTE/W/118), en la que se compilaban las notificaciones relacionadas con el medio ambiente presentadas de conformidad con los Acuerdos de la OMC. La Secretaría actualizaría dicha base de datos para el año 1999.

Punto 6 El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

Análisis por sectores

Agricultura

El Canadá formuló algunas observaciones con respecto a la comunicación presentada por el Brasil (WT/CTE/W/109) en relación con el efecto de las medidas ambientales sobre el acceso a los mercados en el sector agropecuario. El Canadá hizo suyos los principales mensajes contenidos en el documento sobre los beneficios ambientales derivados de la liberalización del comercio agropecuario. El Brasil había reafirmado la opinión de que uno de los beneficios importantes de la liberalización del comercio era la mejora de la gestión medioambiental gracias al desarrollo económico. En sus comentarios sobre el concepto de multifuncionalidad, un aspecto analizado en la comunicación del Brasil, el Canadá convino en que la agricultura podía ofrecer muchas externalidades positivas, con inclusión de beneficios para el medio ambiente, de modo que no ponía en entredicho el papel multifuncional que desempeñaba dicho sector. No obstante, la ayuda a la agricultura, en particular la

CONTINUÍA

relacionada con la producción, podía conducir a una intensificación de la producción agropecuaria con el consiguiente riesgo para el medio ambiente.

El Canadá, los Estados Unidos y otros Miembros compartían la opinión del Brasil de que los países debían solucionar sus problemas relacionados con la multifuncionalidad de un modo tal que se cumpliesen los criterios establecidos en el "compartimento verde", es decir, en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura, asegurándose de lograr sus objetivos sin distorsionar la producción ni el comercio y sin repercutir los gastos en los productores de otros países. Australia, la Argentina y el Canadá sostuvieron que las mejores políticas encaminadas a alcanzar los objetivos medioambientales eran aquellas que estaban bien definidas, eran eficaces en relación con el costo y transparentes y no estaban ligadas a la producción ni al comercio. No se le debería permitir a ningún gobierno invocar el concepto de multifuncionalidad para fomentar políticas en su país que provocasen un deterioro del medio ambiente en otros países. Nueva Zelandia indicó que las ingentes cantidades utilizadas para financiar en el sector agropecuario medidas con efectos de distorsión del comercio, como por ejemplo las subvenciones a la exportación, podían aprovecharse mejor si se canalizaban hacia otras prioridades públicas, como la protección del medio ambiente.

A juicio del Japón, las preocupaciones medioambientales debían examinarse conjuntamente con la liberalización del comercio. Con respecto a la declaración del Canadá, el Japón recordó las deliberaciones del Comité de Agricultura sobre la ayuda desconectada de la producción y las medidas del "compartimento verde"; el CCMA no era el lugar adecuado para celebrar negociaciones sobre la agricultura.

Australia y la Argentina figuraron entre las delegaciones que recordaron que si bien el CCMA no era el foro idóneo para la celebración de negociaciones sobre la agricultura, dicho Comité tenía el cometido de evaluar las repercusiones medioambientales de las subvenciones relacionadas con la producción y la exportación y la contribución que la supresión de las subvenciones a la exportación podía suponer para la mejora de la calidad del medio ambiente. Los Estados Unidos y la Argentina indicaron que el libre comercio contribuiría a una mejor asignación de los recursos, lo que a su vez aligeraría el tributo que la producción imponía al medio ambiente, si los precios reflejaban los costos reales de producción; sin embargo, no era ése el caso, debido principalmente al hecho de que determinados países de la OCDE seguían subvencionando la producción y las exportaciones.

Guatemala, Costa Rica, Chile, Sudáfrica, Tailandia, Filipinas, los Estados Unidos y Nueva Zelandia hicieron hincapié en los beneficios positivos que a largo plazo se derivarían de la supresión de las subvenciones a las exportaciones de productos agropecuarios para el comercio, el medio ambiente y el desarrollo. Los Estados Unidos, la Argentina y otros países observaron que una de las mayores contribuciones de la próxima ronda de negociaciones comerciales estribaría en el examen de las subvenciones dañinas para el medio ambiente, negociaciones que serían triplemente ventajosas, ya que beneficiarían simultáneamente al comercio, al medio ambiente y al desarrollo.

La Argentina hizo referencia a la Conferencia organizada conjuntamente por la FAO y los Países Bajos sobre el carácter multifuncional de la agricultura y la tierra, que se celebró en Maastricht del 12 al 17 de septiembre y cuyos resultados se distribuirían entre los Miembros (WT/CTE/W/127). En esa reunión, se reconoció que la agricultura ofrecía algunos beneficios multifuncionales. No obstante, las subvenciones a la agricultura que estaban relacionadas con la producción, en particular las subvenciones a la exportación, incrementaban la pobreza rural en los países en desarrollo, lo que representaba un factor clave en el deterioro medioambiental que afectaba a dichos países.

Las CE, Polonia y Corea señalaron que convenía adoptar un enfoque equilibrado al examinar los efectos de la liberalización del sector agropecuario sobre el medio ambiente y que se debían tener en cuenta tanto los efectos positivos como los negativos. Las repercusiones de la liberalización del comercio sobre el medio ambiente eran inciertas y no se podían establecer vinculaciones automáticas.

CONTINUÁ

Suiza, las CE y Corea dijeron que las subvenciones podían estar justificadas cuando se utilizaban para contrarrestar disfunciones del mercado y cuando ofrecían externalidades positivas. Suiza indicó que habida cuenta de que las subvenciones también podían contribuir a aumentar los daños medioambientales, en particular en otros países, se deberían establecer mecanismos de apoyo debidamente concebidos para ese fin específico. Se deberían analizar todas las modalidades de subvenciones a la exportación, con inclusión del comercio de Estado y los créditos a la exportación.

Corea y las CE indicaron que existía una relación compleja y dinámica entre los recursos naturales utilizados en la agricultura y el medio ambiente, que incluía la biodiversidad. En opinión de Corea, el CCMA debía examinar los análisis efectuados en otros foros, como por ejemplo los indicadores ambientales de la OCDE, que permitían una calificación de los efectos de la liberalización del sector agropecuario en el medio ambiente, de modo que dicha liberalización pudiese analizarse en un contexto más amplio.

Pesca

La FAO presentó un documento de información fáctico (WT/CTE/W/126) en el que se exponían los resultados de sus estudios sobre las capacidades de captura y las subvenciones. Con arreglo a lo previsto en el Plan de Acción Internacional para la Ordenación de la Capacidad Pesquera, la FAO evaluaría para finales del año 2000 los factores que contribuían a un exceso de capacidad. Con ese fin, la FAO confiaba en poder colaborar con otras organizaciones, como la OMC.

Los Miembros acogieron con satisfacción la declaración y el documento de la FAO. Panamá dijo que la FAO había ayudado a aclarar los efectos de las subvenciones sobre el exceso de capacidad en el sector pesquero. Los Miembros también mostraron su agrado por la adopción del Plan de Acción de la FAO, que según Australia indicaba que las subvenciones influían sobremanera en los problemas relacionados con la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales. Chile y Filipinas señalaron que las subvenciones entrañaban efectos perjudiciales para los países en desarrollo que no eran capaces de subvencionar su industria pesquera.

El Japón, Corea y las CE observaron que la FAO tenía un mandato y una competencia claros a la hora de abordar la conservación de los recursos marinos y que, al mismo tiempo, tenía en cuenta de una manera integrada la relación entre las subvenciones, el comercio y la sostenibilidad. Tomando como base los resultados de los análisis de la FAO y de la aplicación del Plan de Acción por parte de los Miembros de dicha organización, la OMC podría definir una esfera a la que aportar su contribución.

Nueva Zelandia, los Estados Unidos, Chile y otros Miembros indicaron que urgía abordar la cuestión del exceso de capacidad y de las subvenciones a la pesca, que acentuaban dicho problema. Era posible que se diera una situación triplemente ventajosa si se eliminaban las subvenciones a la pesca, ya que ello podría resultar beneficioso para el desarrollo sostenible, el comercio y el medio ambiente. Nueva Zelandia, los Estados Unidos, la Argentina, el Canadá y otros Miembros opinaron que la OMC contaba con experiencia para tratar esa cuestión y que las subvenciones a la pesca se podían examinar en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

El Japón señaló que el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias no abarcaba la cuestión de cómo asegurar una explotación sostenible de los recursos pesqueros, ni aclaraba cómo evaluar los impactos de las subvenciones a la pesca sobre los recursos pesqueros mundiales. Si las subvenciones al sector pesquero habían de examinarse en la OMC, los Miembros quizás debían estudiar la posibilidad de modificar el texto actual del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias o de establecer nuevas normas. Tratar por separado las subvenciones a la pesca no contribuiría a dar con la solución fundamental a la sobreexplotación pesquera. En consecuencia, el

CONTINUÁ

Japón había propuesto establecer dentro de la OMC un grupo que se encargase específicamente de los productos forestales y pesqueros.¹

Se hizo también referencia a las propuestas presentadas al Consejo General durante los preparativos para la Conferencia Ministerial de Seattle en relación con el establecimiento, dentro de la OMC, de un grupo encargado de examinar las subvenciones que contribuyen al exceso de capacidad en el sector pesquero.²

Los Miembros acogieron con agrado el documento de la Secretaría relativo a las normas del GATT/OMC sobre las subvenciones y ayudas otorgadas a la industria pesquera (WT/CTE/W/80/Add.1), que recogía una visión general de las posibles subvenciones relacionadas con la industria pesquera notificadas con arreglo al artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Corea opinó que dicho documento ponía de manifiesto la diversidad y complejidad de las subvenciones otorgadas a la pesca. Se precisaba un análisis global para poder tener una visión completa de los elementos que contribuían a la disminución de los recursos pesqueros.³ Las subvenciones también habían desempeñado un papel fundamental en la redefinición y revitalización de la industria pesquera y de las comunidades dedicadas a la pesca, evitando así que éstas se vieran alentadas a efectuar capturas excesivas.

Las CE indicaron que sus Estados miembros habían destacado en lo referente a la notificación de subvenciones, en un esfuerzo por fomentar la transparencia dentro de la OMC. Se alentaba a los otros Miembros a hacer otro tanto. En opinión de las CE, la cuestión de las subvenciones era un elemento que formaba parte de un problema aún más importante, a saber, la ordenación de los recursos naturales.

La Argentina reconoció que un acceso abierto a los recursos pesqueros planteaba un serio problema a la hora de aplicar políticas adecuadas de gestión de los recursos. Además de ese problema relacionado con la gestión, existían también subvenciones que fomentaban las actividades pesqueras mediante la socialización de los costos de producción.

El Canadá señaló que sus notificaciones estaban relacionadas con el sector pesquero en general y que no se trataba de programas utilizados con miras a facilitar ayuda financiera para la captura de recursos marinos.

A juicio del Japón, existían numerosos ejemplos de subvenciones "buenas" en la lista recogida en el documento WT/CTE/W/80/Add.1. Algunas contribuían a la sostenibilidad. Así por ejemplo, determinadas subvenciones, como las indemnizaciones por el cese temporal de las actividades de pesca a fin de permitir la recuperación de los recursos pesqueros, eran necesarias para aplicar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que prevén la conservación y la gestión de los recursos marinos vivos.

¹ Véase la propuesta presentada por el Japón (WT/GC/W/221).

² Véanse las propuestas presentadas al Consejo General por Islandia (WT/GC/W/229), Nueva Zelandia (WT/GC/W/292); y Australia, Estados Unidos, Filipinas, Islandia, Noruega, Nueva Zelandia y Perú (WT/GC/W/303).

³ Véase la propuesta presentada por Corea al Consejo General en relación con un grupo de negociación específico para los productos pesqueros y forestales (WT/GC/W/368).

Los Estados Unidos dijeron que nadie sostenía que todas las subvenciones fuesen "malas". Las que eran preocupantes eran las subvenciones a la pesca que contribuían al exceso de capacidad. Se estaba debatiendo dicha cuestión en la OMC porque esas subvenciones planteaban problemas para una conservación sostenible de los recursos y tenían efectos de distorsión del comercio.

Nueva Zelanda y la Argentina mostraron su interés por obtener del Japón más información sobre el tipo de cuestiones que resultaría útil examinar en la OMC; en otras palabras, querían saber qué entendía por "solución fundamental" y cuáles eran las subvenciones "buenas". Nueva Zelanda, Filipinas y la Argentina observaron que la mayoría de las notificaciones guardaban relación con el sector de las capturas y parecían contribuir directamente al fortalecimiento de la capacidad pesquera. Casi todas las subvenciones notificadas que se enumeraban en el documento eran otorgadas por países desarrollados.

Silvicultura

El Japón recordó la propuesta que presentó al Consejo General, relativa al establecimiento de un grupo encargado específicamente de los productos forestales y pesqueros (WT/GC/W/221), que constituían recursos naturales limitados que, si bien eran renovables, podían agotarse si no se les aplicaba una gestión adecuada. En las futuras negociaciones sobre dichos productos se deberían examinar conjuntamente todos los factores con miras a establecer un conjunto de normas y disciplinas que contribuyan a la utilización sostenible de los recursos mediante la promoción de una conservación y gestión adecuadas de recursos, que sean además justas y equitativas tanto para los países exportadores como para los importadores.

Servicios relacionados con el medio ambiente

El Canadá dijo que una mayor liberalización del comercio de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente resultaría beneficiosa para el medio ambiente, ya que al reducirse los costos, los gobiernos podrían aumentar la calidad de la infraestructura medioambiental básica y ayudar a promover un desarrollo sostenible. Desde el inicio, en 1997, de la iniciativa de liberalización anticipada y voluntaria por sectores del APEC, el Canadá había encabezado los esfuerzos por facilitar el comercio de los bienes y servicios relacionados con el medio ambiente proponiendo una mayor liberalización de dicho sector. El Canadá confiaba en que la mejora del sistema de clasificación tuviera por resultado una mejor comprensión del sector de servicios relacionados con el medio ambiente, lo que, a su vez, ayudaría a los Miembros de la OMC a contraer compromisos en ese sector en el marco de la próximas negociaciones relativas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Comentarios generales con respecto al punto 6

Un Miembro indicó que la liberalización del comercio combinada con las políticas ambientales adecuadas podía resultar beneficiosa para el medio ambiente. En ese sentido, el acceso a los mercados era una cuestión fundamental para los países en desarrollo, ya que de ese modo se podría disponer de más recursos para la protección del medio ambiente. Los países en desarrollo temían que si las medidas comerciales se adoptaban sobre la base de normas más elevadas que las normas internacionales, ello por sí solo podría conducir al proteccionismo, lo que perjudicaría las oportunidades de acceso a los mercados de los países en desarrollo y su capacidad para adoptar políticas medioambientales.

Los Estados Unidos opinaron que era importante que las políticas comerciales fueran acompañadas de políticas ambientales en el plano nacional para garantizar que la liberalización del comercio contribuyera también a la obtención de beneficios para el medio ambiente. En las normas de la OMC, se reconocía el derecho de los países a establecer sus propios niveles de protección, aun

CONTINUÍA

cuando éstos fueran superiores a los establecidos por las normas internacionales. El cometido de la OMC consistía en combatir las distintas formas de medidas proteccionistas.

El Centro de Comercio Internacional presentó una nueva publicación sobre las implicaciones de los Acuerdos de la OMC para el comercio internacional en las industrias relacionadas con el medio ambiente (*Implications of the WTO Agreements for International Trade in Environmental Industries*), que estaba basado en los seminarios celebrados con los departamentos estatales, las asociaciones comerciales y representantes de la industria relacionada con el medio ambiente de los países en desarrollo. El Centro de Comercio Internacional esperaba poder cooperar con la OMC para facilitar asistencia técnica a los exportadores de tecnologías, productos y servicios ecológicamente racionales.

VINCULACIONES ENTRE EL PROGRAMA MULTILATERAL DE MEDIO AMBIENTE Y EL DEL COMERCIO

Punto 7 La cuestión de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen

Egipto hizo referencia a una carta remitida por la Organización Mundial de la Salud a la Secretaría de la OMC en la que se destacaban los riesgos relacionados con los jabones y productos cosméticos elaborados con mercurio, que se fabricaban en países europeos y se exportaban principalmente a países en desarrollo, aun cuando su venta estaba prohibida dentro del país de origen. Egipto solicitó a las CE que aportaran aclaraciones sobre este particular.

Las CE respondieron que la venta de dichos productos estaba regulada dentro de las CE con arreglo a la Directiva Nº 768 de 1976 relativa a los productos cosméticos. Las CE habían sometido de forma voluntaria los productos elaborados con mercurio así como otra serie de productos a un procedimiento provisional de cumplimiento del principio de información y consentimiento previos (PICP) para regular sus exportaciones a terceros países antes de entrar en vigor la Convención sobre el PICP.

Punto 8 Las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Varios Miembros formularon observaciones preliminares sobre el documento de información fáctico de la Secretaría relativo a la relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC, con especial atención al apartado 3 b) del artículo 27 (WT/CTE/W/125).

A juicio de la ASEAN, existía una importante relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC, y los estudios de casos prácticos por países, recogidos en el documento WT/CTE/W/125 sobre la aplicación de sistemas *sui generis*, así como los ejemplos de legislaciones promulgadas en cumplimiento del citado Convenio eran de suma utilidad.

Un Miembro opinó que existía una incompatibilidad fundamental entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC. El primero hacía referencia a derechos comunitarios y soberanos sobre los recursos naturales de los países, en tanto que el segundo se refería a los derechos de patente y de monopolio particulares de las empresas. El Convenio contenía disposiciones que podían ser incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC: i) al otorgar una patente se planteaba el problema de acceso a los recursos y del control soberano sobre los mismos en caso de falta de información y consentimiento previos; y ii) en lo referente al concepto de distribución de los beneficios, éste estaba recogido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero no en el Acuerdo sobre los ADPIC. El documento WT/CTE/W/125 podía transmitir la impresión de que un país sólo podía garantizar la protección de las obtenciones vegetales recurriendo a las patentes o a la UPOV. En el estudio de casos prácticos de Kenya, se habían descrito cuatro

CONTINUÍA

opciones: un país podía garantizar la protección de las obtenciones vegetales bien mediante la concesión de patentes; bien estableciendo uno de los sistemas enunciados en el Convenio de la UPOV; bien aplicando la normas relativas a la protección de las obtenciones vegetales sin convertirse en miembro de la UPOV; o bien elaborando un sistema *sui generis*.

Los Estados Unidos señalaron que aunque el Convenio sobre la Diversidad Biológica se refería a los derechos soberanos y a los derechos de las comunidades indígenas, en tanto que el Acuerdo sobre los ADPIC hablaba de derechos privados, eso no reflejaba necesariamente una incompatibilidad fundamental entre los dos Acuerdos. El hecho de que con arreglo al Convenio un país pudiese controlar los recursos que se sacaban del país para ser utilizados en la investigación no estaba reñido con el Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo sobre los ADPIC tenía por objeto proteger a las empresas que habían utilizado una innovación para desarrollar un nuevo producto.

Suiza convino en que podía haber cierta incompatibilidad entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC. Por ese motivo, estimaba que la aclaración de los Acuerdos de la OMC y de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) debía constituir una prioridad para la OMC. La posibilidad de que existiera cierta incompatibilidad era suficiente para esforzarse por encontrar juntos un mecanismo que permitiera limar las posibles discrepancias antes de que llegaran a plantear problemas.

El Canadá opinó que el Acuerdo sobre los ADPIC no era incompatible con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Aspectos tales como los conocimientos tradicionales, los derechos de los agricultores o las vinculaciones entre la biodiversidad y la propiedad intelectual exigirían una mayor profundización antes de poder ser incorporados en los acuerdos internacionales. A juicio del Canadá, la OMPI era el principal foro de expertos para examinar los aspectos de propiedad intelectual relacionados con estas cuestiones, lo que no impedía que éstas se trataran también en otros foros, como la OMC. Además, las disposiciones del apartado 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se revisarían en el Consejo de los ADPIC; el Canadá no veía por qué era necesario modificar el texto actual de dicho apartado.

La Argentina indicó que, con el fin de centrar los esfuerzos en la complementariedad del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC, la Secretaría podría facilitar todos los ejemplos de legislación nacional notificada con arreglo al artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC en cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los artículos 15 y 16 de dicho Convenio.

Costa Rica dijo que en cuanto el Congreso revisara su legislación para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, Costa Rica se prestaría encantada a hacer una presentación de su legislación en materia de biodiversidad.

Informe sobre la labor del CCMA en 1999

Los Miembros adoptaron el informe sobre la labor del CCMA en 1999 (WT/CTE/4), que el Presidente presentó al Consejo General en su reunión del 4 de noviembre, y aprobaron asimismo el programa de trabajo del CCMA y su calendario de reuniones para el año 2000 (véase el *Boletín sobre Comercio y Medio Ambiente* N° 30).

FIN